

Diez notas latinoamericanas **Arturo Fernández**

Sólo es posible comprender la coyuntura que viven las regiones y los Estados latinoamericanos a la luz de la multiseccular explotación de sus pueblos y de sus recursos a través de un "orden" económico mundial que consolida los privilegios de los países y los grupos sociales ricos en detrimento de los pobres. Ese falaz "orden" comercial y financiero va acompañado de la dominación política, vehiculada a través de sofismas ideológicos y de la represión sanguinaria, encarnados por la siempre vigente "doctrina de la seguridad nacional" (de los Estados Unidos).

Por su parte, en el conjunto del Tercer Mundo ha comenzado a transcurrir "a hora de los pueblos y las clases oprimidos"; por ello se suceden las luchas anti-imperialistas en América Latina, generando zozobra en el centro hegemónico del sistema capitalista, afectado de una grave crisis estructural.

Esta dialéctica impregna los diez principales hechos del semestre que pasamos a comentar:

1. En México: El "Plan de Salvamento"

Como consecuencia de la aguda disminución del precio del petróleo en el mercado internacional, el país se encontró, en Junio, frente a la objetiva imposibilidad de cumplir sus obligaciones financieras, mientras la inflación llegaba al 100% y el Peso se devaluaba día a día. El 18 de ese mes, renunció el Ministro de Finanzas Jesús Silva Herzog y lo reemplazó Gustavo Petricioli; el 23, este funcionario anunciaba una "nueva" estrategia económico-financiera: ni moratoria ni pago estricto de la deuda sino negociación de nuevos términos de cumplimiento de las obligaciones financieras de México. Tras un mes de tratativas con el Fondo Monetario Internacional, a fines de Julio se acordaba un nuevo "plan de salvamento" de la economía azteca; el mismo consiste en el aporte de 12 mil millones de Dólares durante un período de 18 meses, de los cuales 2 mil millones fueron prestados por el Banco Mundial en tres tramos de cerca de 700 millones cada uno; el compromiso del Banco Mundial se completó con una original cláusula de incentivo al crecimiento: si México no llegase a asegurar una expansión de 3,5% en 1987, el Banco se comprometió a agregar 500 millones de Dólares para financiar inversiones públicas. Otros dos mil quinientos millones provendrían de los Estados Unidos vinculados comercialmente con México (Estados Unidos, a través del Eximbank, prestaría mil millones)...; por su parte, los bancos acreedores aportarían cerca de seis mil millones de Dólares, en la medida que el "gesto" del

FMI y del Banco Mundial los ha conducido a iniciar una nueva rueda de tratativas con el Gobierno de De La Madrid. En otro de sus aspectos innovadores, el "plan de salvamento" incluyó un mecanismo de compensación de las pérdidas que sufriría México si el barril de petróleo costase menos de 9 Dólares.

Pese a la flexibilidad del acuerdo negociado con el FMI y aún cuando este organismo comienza a reconocer que los países deudores deben crecer y desarrollarse para poder pagar sus deudas, la concepción prevaleciente en el citado "plan de salvamento" para la economía mexicana implica una apertura de sus fronteras a los productos y a las empresas extranjeras y la privatización sistemática del sector nacionalizado pictórico y deficitario. ¿Cuáles serían los efectos sociales de la "apertura" incondicional de la economía mexicana?... ¿y sus efectos políticos?...Estos interrogantes nos llevan a una rápida revisión de la situación política mexicana y de su contexto internacional. El Gobierno de Miguel de La Madrid no ha roto ni romperá las reglas de juego del "orden" financiero internacional y seguirá incrementando la deuda externa que ya ha superado los 100 mil millones de Dólares. Sin embargo, su gobierno y el del PRI expresan una tradición de orgulloso nacionalismo popular que no puede cumplir todos los dictados de la racionalidad capitalista transnacional sin generar una grave fractura social y política que pondría fin a la hegemonía del PRI. Por otra parte, México no puede avalar la ocupación militar formal de América Central por los Estados Unidos sin renunciar a los principios elementales de la Revolución de Madero y Zapata.

Por ello, los sectores conservadores norteamericanos están impulsando la destrucción del Estado -PRI, aliados a sus homólogos mexicanos situados en fracciones de la burguesía y en grupos clericales; de ahí deriva la campaña de desprestigio que sufre el gobierno azteca en ciertos medios de comunicación norteamericanos, muy poco preocupados de las graves violaciones de los derechos humanos en Guatemala, en El Salvador o en otros "Estados amigos". Sin embargo, las citadas denuncias -dolosamente amplificadas para deteriorar la política exterior mexicana y para someter aún más al gobierno de De La Madrid - se refieren a hechos preocupantes que expresan el deterioro del sistema político mexicano; esos hechos son, entre otros, las frecuentes violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas, la creciente influencia del narcotráfico, la corrupción policial y la práctica del fraude electoral, sobre todo en algunos estados del norte del país. Cabe subrayar que, en estos estados, ha crecido considerablemente la oposición conservadora, encarnada por el Partido de Acción Nacional (PAN).

2. En el Salvador: La Oposición Sindical

Desde principios de 1986, el hecho político más significativo del escenario salvadoreño fue el desarrollo y consolidación de la Unión Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), una central sindical orientada por reales principios de autonomía y pluralismo político.

La UNTS llegó a convertirse en una importante fuerza de oposición al gobierno de Duarte cuando logró integrar a la Unidad Popular Democrática, conjunto de organizaciones populares que había apoyado a la Democracia Cristiana en las elecciones presidenciales y legislativas. Hoy la UNTS abarca la mayoría de los sectores organizados de obreros y campesinos y trata de incorporar a grupos y movimientos sociales marginalizados de pobladores, desempleados, ambulantes, etc.

La UNTS presentó una "plataforma" de acción social y política destinada a enfrentar el "paquete económico" de inspiración "fondomonetarista", adoptado por Duarte en total contraposición con sus promesas electorales. Como primer objetivo de su accionar, la UNTS propuso alcanzar la paz en El Salvador a través de una solución política negociada; para ello impulsó la realización de un tercer encuentro FDR-FMLN con el gobierno; al fin, éste se vio obligado a realizar preparatorias del diálogo político en México durante los meses de Agosto y Setiembre, tras más de un año de cerradas negativas a emprenderlo. Sin embargo, dicho diálogo no pudo concretarse ante las presiones militares sobre Duarte, quizás alentadas por los Estados Unidos. Cebados por su accionar terrestre y aéreo de exterminio de las poblaciones rurales, los sectores castrenses y sus asesores americanos creen que pueden ganar una guerra que ya ha cobrado cerca de 300 mil víctimas.

La UNTS aparece como una "tercera fuerza" de raigambre popular que, en la medida que se articule políticamente de forma acertada, puede romper el empate militar entre los efectivos del cada vez más impopular gobierno de Duarte y los del FDR-FMLN. Ello implica, desde ya, una solución realmente salvadoreña de la guerra civil y el fin de la presencia imperialista en el país, como reza el punto 6 del programa político de la UNTS: "Iniciar un proceso de recuperación de nuestra soberanía y nuestra independencia patria y no permitir más imposiciones del gobierno de Estados Unidos en nuestro país"¹.

3. En Nicaragua: El Estado de Guerra

El objetivo del movimiento sindical salvadoreño colisiona con la voluntad cada vez más expresa de la Administración Reagan, la cual pretende sofocar la revolución salvadoreña y destruir al régimen sandinista.

En los últimos seis meses, se ha intensificado al máximo la agresión norteamericana contra Managua, al punto que, a principios de noviembre, fuentes gubernamentales de Washington "dejaron trascender -por primera vez- que se estudia una posible intervención militar directa de Estados Unidos en Nicaragua. Más grave aún, el agresivo Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos Elliot Abrams declaraba en Montevideo, el 2 de Noviembre, que

¹ El terremoto que, en Octubre, afectó a San Salvador, constituyó una nueva tragedia que agudizará los problemas sociales y hará más necesario aún el diálogo nacional porta paz en justicia.

"sólo la presión militar llevará la democracia a Nicaragua" y que, sin ella, las posibilidades de acción del Grupo de Contadora "son muy pequeñas".

En realidad, el proceso de pacificación liderado por los Estados de dicho Grupo de Contadora (México, Colombia, Panamá y Venezuela) se paralizó a principios de Junio, al expirar el plazo dado a los países centroamericanos para que firmasen el Acta de Paz; en la reunión de Panamá, que concluyó el 6 de Junio, los cancilleres del Grupo de Contadora y de América Central, conjuntamente con los del Grupo de Apoyo, no pudieron ponerse de acuerdo sobre el último borrador de dicha Acta de Paz y, desde entonces, no volvieron a reunirse. El trasfondo del fracaso relativo de la mediación de Contadora consistió en la cerrada negativa americana a reducir su presencia militar en Honduras y El Salvador y a suspender su ayuda (legal e ilegal) a los "contras-" nicaragüenses. ¿Cómo podía retractarse el Presidente Reagan, quien había calificado de "combatientes de la libertad" a las bandas somocistas?

Superado el obstáculo de una verdadera solución latinoamericana para el problema centroamericano, lo cual implicaba negociaciones directas entre una estabilizada revolución nicaragüense y sus países vecinos, la Administración Reagan se abocó a obtener el apoyo parlamentario (que le fue retaceado en Marzo) para entregarle 100 millones de Dólares a los "contras" nicaragüenses; el 13 de Agosto, el Senado adoptó el programa reclamado por el Poder Ejecutivo, tal como lo había hecho la Cámara Baja. Un hecho fortuito (la captura de un mercenario americano tripulante de un avión que aportaba "ayuda" a los "contras") ha servido para demostrar que, ilegalmente, la Administración Reagan y la CÍA participaban muy de cerca en la agresión de los antiguos somocistas contra Nicaragua. Pero es posible que esa "ayuda" se incremente y hasta se llegue a operaciones militares norteamericanas contra el país centroamericano.

Sin embargo, se observan algunas reacciones alentadoras de parte de los gobiernos latinoamericanos que intentan defender los principios de autodeterminación de los pueblos y de no-intervención. El Grupo de

Contadora y el de Apoyo siguieron en permanente contacto bajo el lema "La paz es aún posible en Centroamérica". (Este es también el título de un documento común que "los 8" entregaron el 1° de Octubre al Secretario General de la ONU).

Por otra parte. Honduras estaría mostrando cada vez más reticencias a permitir que, desde su territorio, se invada Nicaragua; importantes fuerzas socio-políticas hondureñas estarían seriamente preocupadas por la virtual confiscación de una parte de su territorio por las bandas somocistas. Otros países del área también se habrían negado a permitir el entrenamiento de los "contras" en su territorio. Mientras tanto en Nicaragua en estado de guerra, el gobierno sandinista se ha visto obligado a no limitar ciertas libertades políticas pero continúa negociando un estatuto de autonomía con los indios miskitos y un "modus vivendi" con

La iglesia de de Monseñor Obando, la principal fuerza de oposición política que dentro del país, responde a los intereses americanos.

4. En Panamá: La Pugna por El Canal

En Junio, el jefe de las Fuerzas Armadas, General Manuel Antonio Noriega debió acortar un viaje que estaba realizando por Estados Unidos ante la campana periodística que ciertos medios conservadores ámenos lanzaron contra él, acusándolo de traficante de drogas y de armas y de "vender" secretos militares (concernientes al país del norte) a Israel. Entre tanto, los sectores conservadores panameños y americanos seguían imputando a los militares y al propio Noriega la muerte del aventurero Hugo Spadafora, quien había acompañado a Edén Pastora en su camino hacia la rebelión antisandinista.

Fue el propio embajador norteamericano en Panamá, Arthur Davis, quien aclaró ampliamente el sentido de los ataques contra la llamada Guardia Nacional y sus jefes, herederos del sentimiento nacionalista del "accidentado" Comandante Torrijos; el 23 de Octubre, en un discurso ante la Cámara Americana de Comercio, Davis declaró que su gobierno quisiera que los militares panameños se mantuvieran al margen de la política y que se estableciera "una total democracia en Panamá". Luego advirtió que "instituciones con un total funcionamiento democrático -son la mejor garantía para los estadounidenses y para los panameños de que la transferencia del Canal de Panamá será todo un éxito"(!)

Es preciso recordar que Reagan se opuso, estando en la oposición, al Tratado Carter-Torrijos que prevé la gradual devolución al país latinoamericano de la Zona del Canal y de la propia vía de agua. No sería demasiado imaginativo pensar que la derecha americana ansia destruir los últimos bastiones militares y civiles del torrijismo para poder renegociar el "status" del Canal el "status" del Canal de Panamá, que nunca se resignó a "perder", con un "democrático gobierno" de la derecha panameña proamericana, poco apreciado por los "halcones" de Washington.

Como en el caso de México, el régimen panameño muestra signos de agotamiento y de corrupción que involucran tanto a civiles como a militares; esos signos aumentaron después de la muerte de Torrijos y el avance de la derecha militar y política. El año pasado, bajo el liderazgo del General Noriega, los militares trataron de revertir esa tendencia, determinando la renuncia del Presidente Ardito Barletta, por considerarlo enfeudado al poder económico transnacional. Lo sustituyeron por Eric Delvalle, jefe de un pequeño partido que integra la Unión Democrática liderada por el torrijista Partido Revolucionario Democrático. Pero quizás no está aún resuelto el problema del liderazgo del movimiento nacionalista, dividido en diversas tendencias.

Si bien las declaraciones de Davis generaron duras respuestas de los dirigentes panameños, ellas constituyen una forma de intervención directa desusada en los asuntos de otro país; más aún, como en el caso mexicano, ello pone en cuestión la estabilidad de un sistema político latinoamericano sólo porque

pretende afirmar dignamente sus derechos esenciales. Si estos regímenes tienen defectos ¿son ellos mayores que los de supuestas "democracias" amigas de Estados Unidos como Egipto, Indonesia, el Brasil de la década de los 70 o Corea del Sur?

5. En Solivia: La Presencia Militar Americana

El 14 de Julio, tropas y helicópteros norteamericanos lanzaron una operación militar contra el cultivo de la coca y la producción de drogas "conjuntamente" con fuerzas bolivianas; ella no fue autorizada ni siquiera conocida por el Parlamento de este país. Los efectivos norteamericanos iban a permanecer —según el gobierno boliviano— 20 días; se quedaron hasta el 15 de Noviembre. ¿Qué lograron? En materia de lucha contra el narcotráfico los resultados fueron magros. Ciertas "filtraciones" de la prensa (?) norteamericana redujeron el "efecto sorpresa" del operativo y luego hubo demoras, de las que fueron responsables los jefes militares estadounidenses, por todo lo cual se facilitó la fuga de los narcotraficantes que, de paso, asesinaron al biólogo Noel Kempff y a dos de sus acompañantes en la región selvática fronteriza con el Brasil.

En cuatro meses de permanencia en Solivia, pocos, muy pocos, parecieron los centros productivos de cocaína destruidos y menos aún los narcotraficantes apresados pese a la presencia de la Agencia Anti-narcóticos americana (la DEA) sobre el terreno. Finalmente, se ha convenido un borrador preliminar de un Plan trienal anti-producción y anti-tráfico de drogas que institucionaliza la colaboración de las autoridades bolivianas y americanas; se ha previsto una inversión de 300 millones de Dólares, la cual correría principalmente por cuenta de los Estados Unidos. ¿No convendría haber comenzado por este acuerdo?

No es de extrañar que muchos observadores suspicaces denunciaran segundas intenciones en el inédito despliegue de 170 soldados americanos provistos de sofisticados equipos ¿No pretenderán los Estados Unidos crear bases militares estables en Solivia al estilo de las ya establecidas en Honduras? Por otra parte, los países donde abunda el narcotráfico son, además de Solivia, sociedades conflictivas que tienen intereses enfrentados con la potencia hegemónica: México, Panamá, Colombia, Perú... ¿Se enviarán tropas americanas a cada uno de ellos?

La sociedad boliviana; recorrida por graves conflictos sociales y desarticulada por la gravedad de la crisis, reaccionó contra la presencia militar extranjera; la mayoría de los partidos políticos, sindicatos e instituciones cívicas creó un "Consejo de Defensa de la Soberanía Nacional, el cual organizó un importante acto el 22 de Agosto en La Paz. A los pocos días con motivo del éxito que registraba la movilización obrera "Marcha por la Vida" (desde Oruro a La Paz), el gobierno de Paz Estenssoro decretó el estado de sitio por segunda vez en menos de un año y ordenó la detención de dirigentes políticos y sindicales. Con ello, el gobierno electo de Solivia, a semejanza de las dictaduras, no hace sino aplazar los problemas.

6. En Chile: La Tiranía Continua

En Junio la Asamblea de la Civilidad -la más vasta organización político-social de la Resistencia Chilena- organizó un programa de desobediencia civil pacífica que culminó con el paro nacional del 2 y Julio. Ante la amplitud de la movilización popular de esos días, se desató una cruel represión cuya más abominable muestra fue protagonizada por efectivos del Ejército que, en Santiago, rociaron con gasol a y prendieron fuego a dos jóvenes manifestantes, uno de los cuales falleció.

El atentado fallido contra el tirano del 7 de Setiembre generó una nueva ola represiva pero también expresó un alto grado de organización de la resistencia armada. Ello hace recordar al intento de eliminar a Hitler, puesto en práctica por oficiales alemanes que buscaban rescatar la dignidad del pueblo alemán en 1944; como en este caso histórico, el azar protegió al gobernante genocida y prolongó los sufrimientos de un pueblo.

Por su parte, la oposición de centro derecha había ofrecido iniciar tratativas con el gobierno para acordar una transición hacia la democracia, centrando sus demandas en la modificación de la actual Constitución para posibilitar la elección directa de Presidente. La respuesta de Pinochet fue que el procedimiento ya está hecho sin necesidad de diálogo. El 18 de Octubre, Gabriel Valdés, Presidente del Partido Demócrata Cristiano, descartaba la posibilidad de un acuerdo político en los términos impuestos por la dictadura.

Para la Administración Reagan, la solución deseable sería persuadir a Pinochet que abandone el gobierno pacíficamente en 1989, a más tardar; pero no ha puesto en práctica presiones enérgicas contra la dictadura, salvo la amenaza (no concretada) de votar contra un préstamo a Chile del Banco Mundial. Es plausible que los "socios" chilenos de los americanos (tanto militares como civiles) hayan logrado atemperar las veleidades "democratizantes" de la Casa Blanca expresadas en las operaciones de destitución de los dictadores Marcos y Duvalier a principios de 1986. Sin embargo, ¿quién garantizará el "status quo" después de la ineluctable caída del "pinochetismo"? Esto también se lo deben estar preguntando los asesores de la Presidencia norteamericana...

7. En Perú: La Masacre de Los Penales

Horas antes de iniciarse un Congreso de la Internacional Socialista convocado en Lima, se amotinaron los presos políticos enrolados en el grupo subversivo Sendero Luminoso en las tres cárceles de la capital.

El Gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas que restableciesen el orden, lo cual se ejecutó con rapidez (18/19 de Junio); entonces se produjo una cruel e innecesaria matanza de casi todos esos presos que ya se habían rendido, tanto en el penal de Lurigancho como en El Frontón. Más de doscientas personas fueron así asesinadas, las que se sumaron a las seis mil víctimas de la era de violencia que está viviendo el Perú desde 1980.

Bajo la presión de los organismos de Derechos Humanos, de la Iglesia y de los propios dirigentes social-demócratas que participaban del mencionado Congreso de la I.S., el Presidente García llegó a ordenar el arresto y el enjuiciamiento de oficiales y soldados de la Guardia Republicana y de algún responsable militar de la masacre de Lurigancho (27 de Junio). Los rumores de golpe de Estado que circularon en el extranjero el 28 y 29 de Junio puede que expliquen la ulterior falta de decisión del Gobierno para sancionar a los responsables de la matanza de presos que se sumó a las frecuentes violaciones de Derechos Humanos en las Zonas de Emergencia militarizadas; asimismo, poco se aclaró la responsabilidad de los inspiradores y ejecutantes de esos homicidios masivos. En todo caso, el gobierno de Alan García, electo por amplia mayoría y que proclama constantemente su vocación nacionalista y popular, no ha podido o no ha querido enfrentar a la subversión política con medios distintos a los practicados por las Fuerzas Armadas adiestradas en la Doctrina-de la Seguridad Nacional.

Los sucesos de junio marcan un hito en la trayectoria de un gobierno que pretendía ser una "alternativa distinta" en América Latina. Nada será igual en el Perú después de semejante violación de los Derechos Humanos; sobre todo, nada será igual para el gobierno responsable de la misma. Por un lado, ese gobierno democrático se verá cada vez más acosado por la creciente militarización del Estado y del territorio del país; por otra parte, correrá el peligro de arrastrar a la sociedad hacia una aceptación pasiva del terrorismo de Estado, la más condenable y cruel de todas las formas de la violencia política.

Que el APRA y el Presidente García siguen siendo mayoritarios en gran parte del Perú lo demostraron, no siempre de modo cristalino, las elecciones municipales de noviembre; pero también estas elecciones revelaron que una mayoría de electores posee una "desmemoriada benevolencia" frente al tema de la masacre de los penales. Esta "capacidad de pronto olvido" presagia horas oscuras para el conjunto de la sociedad peruana, cada vez más "acostumbrada" al ejercicio de la violencia y de la represalia armada.

Pensamos que no es posible la paz en ningún país de América Latina construida sobre el terrorismo de Estado; y deseamos que haya muchos procesos judiciales como los que se han realizado y continúan-sustanciándose en la Argentina contra los genocidas responsables de miles de desapariciones, de torturas y vejámenes, de secuestro de niños, etc. Sólo la justicia de Nuremberg hizo posible la convivencia entre verdugos y víctimas en la Europa liberada.

8. En Argentina: El Conflicto con Gran Bretaña

A fines de Octubre, el gobierno británico decidió unilateralmente extender a 150 millas la zona económica exclusiva en torno a las Islas Malvinas, atizando el conflicto con la Argentina que se mantenía latente desde el fin de la Guerra del Atlántico Sur de 1982.

Primeramente, lo arbitrario de la medida británica reside en el hecho que el Reino Unido no reconoce el carácter jurídico universal de tales zonas marítimas adyacentes a países ribereños; justamente son los Estados del Tercer Mundo los que pugnan por imponer el principio de la extensión de dichas zonas hasta las 200 millas marinas. Por otra parte, el gobierno democrático argentino estaba empeñado en la búsqueda de soluciones pacíficas a sus controversias internacionales, como lo demostró el Tratado de Límites con Chile que puso fin al contencioso del Beagle; y las Naciones Unidas habían instado a una negociación integral argentino-británica que incluiría la soberanía de las islas y que supondría abstenerse de actos que agravasen el litigio.

Es plausible que la medida británica haya tenido relación con los intereses electorales de la Sra. Thatcher, quien afrontaría una baja importante de su popularidad y cada vez más próximas elecciones legislativas. Sin embargo, observadores de la situación internacional asignan mayor importancia explicativa de la actitud inglesa a la reciente firma de contratos pesqueros entre la Argentina y la Unión Soviética-Bulgaria; Buenos Aires está negociando contratos similares con Polonia y Japón; con ellos, se estaría logrando un reconocimiento de hecho de parte de la comunidad internacional de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Estados Unidos -seguramente consultado por Gran Bretaña- habría aceptado la postura de Londres para manifestar su desagrado por las "veleidades no-alineadas" del gobierno de Alfonsín que conducirían a una significativa presencia de pesqueros soviéticos, búlgaros y polacos en aguas americanas sin posibilidad de control militar.

Esta agresión no buscada por la Argentina llegó en mal momento para el gobierno radical, confrontado a dificultades en su Plan Austral, a una situación social tensa y, sobre todo, a una irresuelta relación con los militares, incapaces de aceptar responsabilidad en sus terribles violaciones de los derechos humanos, y con la cúpula eclesiástica, solidaria con los elementos "procesistas" y anti-democrática.

El gobierno de Alfonsín ha respondido con cautela pero también con firmeza al desafío británico; ratificando su apego a los métodos pacíficos, ha iniciado una compleja batalla diplomática buscando el apoyo latinoamericano, a fin de lograr "una propuesta digna de negociación" con Gran Bretaña. La decisión inglesa tiene vigencia a partir de enero y es posible que aún se abra un plazo para reiniciar las conversaciones directas entre Buenos Aires y Londres.

9. En Brasil: Elecciones Legislativas, Constituyentes y de Gobernadores

Las elecciones del 15 de noviembre representaron la culminación del proceso de redemocratización del Brasil porque definieron la composición de la Asamblea Nacional Constituyente que tiene por mandato dar una nueva forma político-institucional al país; todo indica que este marco jurídico posibilitará la

instauración plena de los mecanismos democráticos, incluida la elección directa del Poder Ejecutivo Nacional.

Los resultados electorales afianzaron el predominio político de la coalición gobernante, Alianza Democrática, formada por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Frente Liberal; a este último pertenece el Presidente Sarney, quien demostró en las urnas la veracidad de las encuestas que le otorgaron altos índices de popularidad, sobre todo a partir del relativo éxito del Plan Cruzado que ha logrado estabilidad en los precios con un vigoroso crecimiento económico. Pese a su sorprendente capacidad de liderazgo (que no se sospechaba cuando asumió accidentalmente la Presidencia), Sarney debe compartir el triunfo con el PMDB que ha ganado en 20 de los 23 Estados y tendrá mayoría propia en la Legislatura y en la Asamblea Constituyente; este Partido-Movimiento tiende a convertirse en una gran fuerza hegemónica, aglutinante de vastos sectores sociales y de diversas posturas ideológicas, al estilo de los antiguos "populismos", pero reclamándose mayoritariamente de una postura "social demócrata" modernizante.

Respecto a la izquierda no inserta en el PMDB, se registró un crecimiento electoral importante del Partido de los Trabajadores de Lula y un retroceso del Partido Democrático Laborista de Leonel Brizóla, cuyas aspiraciones presidenciales sufrieron un duro golpe.

10. Un Nuevo Proyecto de Integración Económica

Las visitas del Presidente brasileño Sarney a Buenos Aires (fines de julio) y del Presidente uruguayo Sanguinetti a Brasilia (agosto) permitieron formalizar significativos acuerdos económicos entre Argentina, Brasil y Uruguay, que constituirían la base de un mercado común con ulteriores proyecciones latinoamericanas.

Sarney y Alfonsín firmaron diez protocolos orientados a intensificar el intercambio comercial y la cooperación económica, mediante la liberación de aranceles aduaneros, la apertura de líneas de crédito y la realización de proyectos de desarrollo binacional en materia energética y en tecnologías de punta. Asimismo, se creó un fondo binacional de inversiones, donde cada país contribuirá con 100 millones de Dólares.

Los acuerdos uruguayo-brasileños se formalizaron en seis protocolos de cooperación bilateral en las áreas de ciencia y tecnología, agropecuaria, formación profesional, aprovechamiento de recursos naturales e integración ferroviaria.

A partir de octubre, comenzó a funcionar la experiencia de "mercado común" argentino-brasileño-uruguayo, privilegiándose ciertos sectores claves de la producción como el de bienes de capital. Tras las frustraciones integracionistas que representaron la ALALC o la ALAD I, los países de la Cuenca del Plata se sitúan en un nuevo punto de partida para la consecución de un caro objetivo

latinoamericano: el logro de la integración económica como base de la unidad política. Para alcanzarlo, sus gobiernos deberán vencer las tendencias parasitarias de las respectivas burguesías nacionales y controlar la voracidad de las empresas transnacionales. Estas han sido y son las principales trabas al desarrollo de los procesos integrativos en toda la región; los gobiernos del Cono Sur se habrían propuesto eliminarlas. Tarea nada fácil.

En realidad, es muy difícil, como lo muestra la experiencia histórica, construir y cimentar, sobre bases duraderas, la solidaridad y la unidad latinoamericanas. Sin embargo, esta ardua empresa es una de las condiciones para poder edificar sociedades justas y auténticamente democráticas en esta parte del mundo.